

EMERGENCIA SANITARIA: La norma jurídica, la Zona de Seguridad y los efectos legales en el ámbito interno.

Es importante entender el marco jurídico que ampara el accionar de las Fuerzas Armadas ecuatorianas en las operaciones militares de seguridad interna en apoyo a la Policía Nacional y los efectos legales que conlleva su conducción operativa.



Por Oswaldo Moreno



El autor es abogado y experto en temas de seguridad y defensa hemisférica.

Actualizado:

26 de marzo de 2020. A las 12h15

[Read in English](#)

[Ler em português](#)

[Lire en Français](#)



WIX



QUITO – Como General de la República y como abogado en libre ejercicio profesional es de mi responsabilidad moral, asesorar a las autoridades pertinentes sobre los efectos legales que conlleva una buena o mala planificación, organización, empleo y control de la conducción de las operaciones militares en el **ÁMBITO INTERNO** en esta emergente crisis mundial.



“Es de mi responsabilidad moral, asesorar a las autoridades pertinentes sobre los efectos legales que conlleva una buena o mala planificación...”

Se preguntarán entonces: ¿Y para qué están los abogados militares?, mi respuesta es sencilla... los abogados saben de leyes, pero desconocen el verdadero empleo de la estrategia militar como ciencia y arte que se deduce del

conocimiento cierto de las ciencias militares cuando se relaciona una crisis con el balance del poder nacional.

El Centro europeo para la prevención y el control de enfermedades conocido por sus siglas ECDC (European Center for Disease prevention and Control), informa que, desde el 31 de diciembre de 2019 hasta el 25 de marzo de 2020, se han notificado a nivel mundial 416.916 casos de COVID-19, de los cuales se han lamentado 18.565 muertes y 302.288 casos positivos en los últimos 15 días. En nuestro país -según el ECDC- se informa que tenemos 1.082 casos confirmados, 27 muertes y 1.067 casos positivos presentados en los últimos 15 días.

La norma jurídica

Las autoridades ecuatorianas a través del Ministerio de Salud Pública declararon el estado de emergencia sanitaria por la inminente posibilidad del efecto provocado por el Coronavirus COVID-19, y previene un posible contagio masivo en la población (Acuerdo Ministerial Nro. 00126-2020 del día jueves 12 de marzo de 2020). Consecuente a esta declaratoria, el Ministerio del Trabajo expide las directrices para la aplicación de teletrabajo

emergente y además expide las directrices para la aplicación, modificación o suspensión emergente de la jornada laboral durante la declaratoria de emergencia sanitaria.

El Presidente de la República mediante Decreto Ejecutivo No. 1017 de fecha 16 de marzo de 2020 decreta el estado de excepción por **CALAMIDAD PÚBLICA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL**, por los casos de Coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud, que representan un alto riesgo de contagio para toda la ciudadanía. De la misma manera, el primer mandatario, en alcance a la declaratoria de excepción antes citada, emite el Decreto No. 1019 de fecha 22 de marzo de 2020 en donde se establece como **ZONA ESPECIAL DE SEGURIDAD** a toda la provincia del Guayas con especial atención a los cantones de Guayaquil, Daule, Durán y Samborondón, a fin de mitigar los riesgos, precautelar la salud, proteger a la población, evitar el contagio del virus COVID-19.

La Constitución de la República en su Art. 165 prescribe que el Presidente de la República una vez que haya declarado el estado de excepción

podrá disponer –entre otras cosas–, el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional; establecer como **ZONA DE SEGURIDAD A TODO O PARTE DEL TERRITORIO NACIONAL**; llamar a servicio activo a toda la reserva o a una parte de ella, así como al personal de otras instituciones; y, podrá disponer la movilización y las requisiciones que sean necesarias.

La Ley de Seguridad Pública y del Estado en su Art. 38, señala la acepción de **ZONA DE SEGURIDAD** como el espacio territorial ecuatoriano cuya importancia estratégica, características y elementos que la conforman, requiere de una regulación ESPECIAL con la finalidad de garantizar la protección de esta zona ante eventualidades o amenazas a la seguridad objeto de esta ley.

El Art. 35 (ibidem) de la misma ley señala lo siguiente: “De la complementariedad de acciones de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.- Declarado el estado de excepción y siempre que el Presidente de la República haya dispuesto el empleo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, deberán coordinar acciones para que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional, responsable del

mantenimiento del orden público, hasta que éste haya sido restablecido. Será el Ministro de Gobierno, Policía y Cultos el responsable de la coordinación de las acciones entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.”

Es importante recalcar que los antecedentes jurídicos antes descritos, nos permitirán establecer con claridad la JURISDICCIÓN como potestad de los jueces para administrar justicia y la COMPETENCIA como poder específico que la ley otorga a una persona para que pueda efectuar el mandato legal dentro de sus funciones.

El Código Orgánico General de Procesos, delimita con claridad estos dos conceptos jurídicos: JURISDICCIÓN y COMPETENCIA.

Señala que los jueces tienen jurisdicción, que puede ser definida como la facultad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado y determina que la medida de dicha jurisdicción es la competencia; esto es, el marco dentro del cual actúa cada juez y señala —el COGP— que, para que un proceso judicial sea válido debe llevarse a cabo y ser resuelto por juez competente, siendo que la competencia se radica, en primer lugar, según el territorio y, posteriormente por la materia

(civil, penal, militar, administrativa, tributaria entre otros).

La Zona de Seguridad

Una vez declarada como ZONA ESPECIAL DE SEGURIDAD a la Provincia del Guayas, se debe establecer la jurisdicción de sus jueces naturales y la competencia del accionar de sus comandantes. Como la ZONA ESPECIAL DE SEGURIDAD, es una acepción desconocida en el ámbito de la Seguridad Interna, no existe jurisdicción ni competencia legal que permita justificar el accionar de los militares en este sector de la patria. Por lo tanto, si el Decreto Ejecutivo Nro. 1019 de fecha 22 de marzo de 2020 pretende mitigar los riesgos, precautelar la salud, proteger a la población y evitar el contagio del virus COVID-19, debe ser el Comité de Operaciones de Emergencias a nivel provincial y dirigido por el Gobernador del Guayas el que coordine todas las acciones para que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional en el mantenimiento del orden público, hasta que éste haya sido restablecido.

Cabe destacar que hubiese sido adecuado declarar como ZONA DE SEGURIDAD a todo el territorio nacional por cuanto la pandemia

está ahogando todos los sectores geográficos de la nación y disponer al Comandante del Comando de Operaciones “Occidental” (Guayas, Santa Elena, Manabí y Galápagos) que reajuste su dispositivo (conducción) en apoyo a la Policía Nacional con especial atención en los cantones: Guayaquil, Daule, Durán y Samborondón. Con esto se hubiese evitado desconcentrar al mando militar y policial (Jefes de Estado Mayor de la Armada y Policía Nacional) en la conducción de su planificación a nivel nacional.

Cabe entonces hacerse dos preguntas a manera de reflexión:

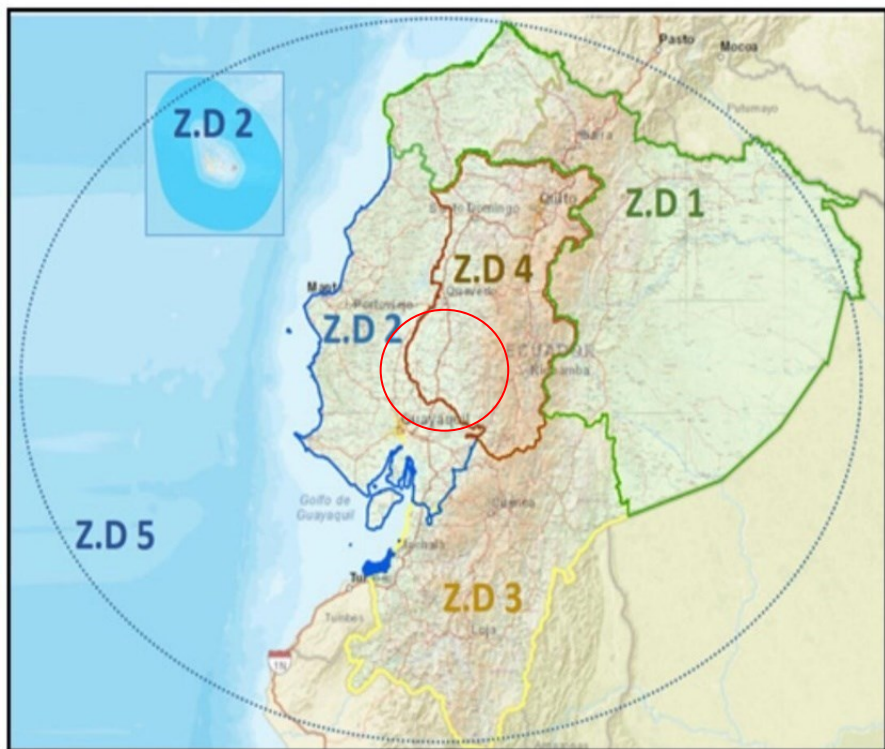
¿Fue necesaria la creación de la ZONA ESPECIAL DE SEGURIDAD?

Presumo que NO, por razones legales de jurisdicción y competencia ya que esta acepción no existe en la ley.

¿Fue necesaria la creación de la FUERZA DE TAREA CONJUNTA “GUAYAS”?

Presumo que NO, porque la conducción de las operaciones tipo policiales en apoyo a la Policía Nacional, permite reajustar el dispositivo de acuerdo a las circunstancias operativas del momento. (Reforzar, agregar, cambiar el

“centro de gravedad”, reserva centralizada, reserva articulada, reserva descentralizada, etc., etc... son decisiones que los comandantes operativos pueden ejecutar sin necesidad de crear una nueva unidad.)



Fuente: Libro Blanco 2018

Los efectos legales

El Plan Militar de Defensa Interna de las Fuerzas Armadas ha sido actualizado con la Constitución de la República del año 2008 y con la Ley de Seguridad Pública y del Estado del 2009. Bajo el nuevo nombre de PLAN DE

EMPLEO DE LAS FUERZAS ARMADAS EN EL ÁMBITO INTERNO, sus preceptos legales deberían estar articulados y sobre todo deberían tener la debida concordancia con la Ley Orgánica de la Defensa Nacional o su equivalente. Para que esta articulación sea coherente con el accionar de la Institución militar y policial es necesario que se apruebe en la Asamblea Nacional el Código Orgánico de Seguridad con sus cuatro proyectos de ley: seguridad pública, inteligencia estratégica, seguridad ciudadana y prevención de riesgos. No es justo que los cálculos políticos de los asambleístas hayan marginado la aprobación de este cuerpo legal que permite actualizar las leyes con las nuevas tendencias globales en Seguridad y Defensa.

Esta falta de respaldo legal a nuestras instituciones está permitiendo el abusivo desborde de la delincuencia por sobre la ley. Lamentablemente, ha sido pública y notoria la burla flagrante de algunos ciudadanos por incumplir el estado de excepción y el toque de queda. La Fuerza Pública en apego al mandato constitucional cumple las misiones encomendadas y ante esa desobediencia ciudadana ha empleado recursos arcaicos de

empleo de la fuerza que no se justifican pero que nos hacen ver la impotencia e incapacidad institucional a falta de buenas leyes.

Hemos sido informados que la Fiscalía General del Estado mediante comunicado de fecha 25 de marzo, exhorta a las instituciones y a los ciudadanos a actuar respetando los Derechos Humanos. Se iniciará por tanto una investigación por delitos contra la integridad de las personas y los miembros de la Fuerza Pública identificados en los videos que circulan las redes sociales, serán sometidos al juzgamiento de los jueces competentes a pesar de que los uniformados recibieron la orden de hacer cumplir la ley por la fuerza.

El Art. 33 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado prescribe: “De la responsabilidad.- Durante los estados de excepción, el abuso del poder, por cualquier agente o funcionario del Estado, debidamente comprobado será sancionado administrativa, civil y penalmente, y considerando los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. Las autoridades civiles, militares y policiales serán responsables de las órdenes que impartan. La obediencia a las órdenes superiores no eximirá de responsabilidad a

quienes las ejecuten, conforme lo prevé el último inciso del artículo 166 de la Constitución de la República.”

Las tropas no saben que hacer, no confían en sus comandantes cuando caen en desgracia.

Recordemos que existen más de una veintena de militares procesados por la fiscalía por la presunción del mal empleo del uso progresivo de la fuerza, y la falta de un eficaz patrocinio por parte de la institución militar ha impedido una defensa contundente a favor de nuestros compañeros que deben acudir con sus propios recursos a defender lo que ellos consideraron cumplieron con su deber.

Personalmente, considero que existe una motivación política dentro de esta desgracia para causar el caos y el desorden. Es una gran oportunidad para desprestigiar al gobierno y al buen accionar de la fuerza pública que en favor de la gran mayoría de los ciudadanos está velando por su seguridad y supervivencia.

El primer mandatario en uso de sus facultades constitucionales en apego al estado de excepción, bien podría exhortar a la Asamblea Nacional para que priorice la aprobación de tan

esperado Código Orgánico de Seguridad y sus proyectos de ley.

Sería una excelente oportunidad para que el Presidente de la República afiance y fortalezca su apoyo a las Fuerzas militares y policiales a las que se afana en felicitar y aplaudir en los momentos de crisis.

Esperemos que esto cambie, caso contrario ya sabremos quiénes son los verdaderos culpables de nuestra tragedia... (O)



Miguel Oswaldo Moreno Valverde, es un general ecuatoriano en servicio pasivo, abogado y experto en temas de Seguridad y Defensa Hemisférica. Fue Asesor Militar en el Colegio Interamericano de Defensa en Washington D.C., y su perfil profesional engloba amplias áreas del pensamiento académico: Es Master Internacional en Administración de Empresas MBA., con especialidad en mercadotecnia, Ingeniero Comercial, Licenciado en administración y en Ciencias Militares y Doctor en Ciencias de la Educación. Estudió además tres diplomados: Diplomado en Técnicas de la Enseñanza (CEP-Brasil), Diplomado Superior en Política, Seguridad y Democracia (FLACSO-Ecuador) y Diplomado en Gerencia Financiera (ADEN International Business School).



Opinion

COMMENT

HEALTH EMERGENCY: The legal rule, the Security Zone and the legal effects at the domestic level.

It is important to understand the legal framework for the action of the Ecuadorian Armed Forces in military internal security operations in support of the National Police and the legal effects of their operational conduct.



[By Oswaldo Moreno](#) 

The author is a lawyer and expert on hemispheric security and defense issues

Updated:

March 26, 2020. At 12:15 p.m.

[Leer en español](#)

[Ler em português](#)

[Lire en Français](#)



QUITO – As General of the Republic and as a lawyer in free professional practice is my moral responsibility, advising the relevant authorities on the legal effects of good or poor planning, organization, employment and control of the conduct of military operations IN THE INTERNAL SCOPE in this emerging global-crisis.



“It is my moral responsibility to advise the relevant authorities on the legal effects of good or poor planning...”

They will then ask: And what are the military lawyers for, my answer is simple... lawyers know about laws but are unaware of the true use of military strategy as science and art that is

inferred from certain knowledge of military science when a crisis is related to the balance of national power.

The European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) reports that from 31 December 2019 to 25 March 2020, 416,916 cases of COVID-19, of which 18,565 deaths and 302,288 positive cases have been mourned in the last 15 days. In our country - according to the ECDC - we report that we have 1,082 confirmed cases, 27 deaths and 1,067 positive cases presented in the last 15 days.

The legal norms

Ecuadorian authorities through the Ministry of Public Health declared a state of health emergency because of the imminent possibility of the effect caused by Coronavirus COVID-19, and prevents possible mass contagion in the population (Ministerial Agreement Nro. 001262020 on Thursday, March 12, 2020). In violation of this declaration, the Ministry of Labour issues the guidelines for the application of emerging telework and also issues the guidelines for the emerging implementation, modification or suspension of the working day during the declaration of emergency.

The President of the Republic by Executive Decree No. 1017 dated 16 March 2020 decrees the state of emergency for **PUBLIC CALAMITY IN ALL THE NATIONAL TERRITORY**, for the confirmed cases of Coronavirus and the declaration of pandemic of COVID-19 by the World Health Organization, which represent a high risk of contagion for all citizens. In the same way, the first representative, scoped to the declaration of exception mentioned above, issues Decree No. 1019 dated 22 March 2020 establishing as a **SPECIAL SECURITY AREA** to the entire province of Guayas with special attention to the cantons of Guayaquil, Daule, Durán and Samborondón, in order to mitigate the risks, precaution the health, protect the population, avoid the contagion of the COVID-19 virus.

The Constitution of the Republic in Article 165 provides that the President of the Republic once he has declared a state of emergency may provide, inter alia, for the employment of the Armed Forces and the National Police; establish as a **SECURITY AREA TO ALL OR PART OF THE NATIONAL TERRITORY**; call active service to the entire

reservation or part thereof, as well as the staff of other institutions; and, may arrange for the necessary mobilization and requisitions.

The Law on Public and State Security in Article 38, points to the concept of **SECURITY AREA** as the Ecuadorian territorial area whose strategic importance, characteristics and elements that make up it, requires a **SPECIAL** regulation in order to guarantee the protection of this area against eventualities or threats to security subject to this law.

Article 35 (ibid.) of the same law states: "From the complementarity of actions of the Armed Forces and National Police.- Declared the state of emergency and provided that the President of the Republic has arranged for the employment of the Armed Forces and the Police National, they shall coordinate actions for the Armed Forces to support the National Police, responsible for maintaining public order, until it has been restored. The Minister of Government, Police and Cults will be responsible for coordinating actions between the National Police and the Armed Forces."

It is important to emphasize that the legal background described above will allow us to

clearly establish jurisdiction as the power of judges to administer justice and

COMPETITION as a specific power that the law grants to a person so that he can to carry out the legal mandate within their duties.

The General Organic Code of Processes clearly defines these two legal concepts: JURISDICTION and COMPETITION. It notes that judges have jurisdiction, that it may be defined as the power to judge and enforce the court and determines that the measure of that jurisdiction is jurisdiction; that is, the framework within which each judge acts and indicates the COGP that, in order for a judicial process to be valid, it must be carried out and decided by a competent judge, being that jurisdiction is based, first, according to the territory and, subsequently by the matter (civil, criminal, military, administrative, tax, among others).

The Security Zone

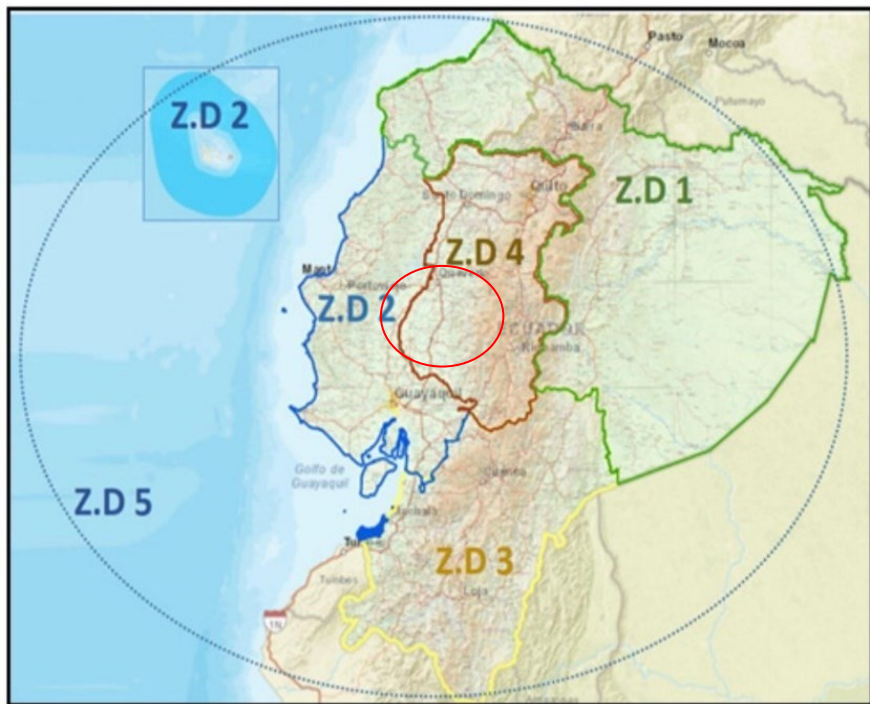
Once declared as a SPECIAL SECURITY AREA to the Province of Guayas, the jurisdiction of its natural judges and the competence of the actions of their commanders must be established. As the SPECIAL

SECURITY AREA, it is an unknown concept in the field of Internal Security, there is no jurisdiction or legal competence to justify the action of the military in this sector of the homeland. Therefore, if The Executive Decree No. 1019 dated 22 March 2020 aims to mitigate the risks, precaution the health, protect the population and prevent the contagion of the COVID-19 virus, it should be the Emergency Operations Committee at the provincial level and led by the Governor of Guayas who coordinates all actions for the Armed Forces to support the National Police in maintaining public order, until it has been restored.

It should be noted that it would have been appropriate to declare as a SECURITY AREA the entire national territory because the pandemic is drowning out all geographical sectors of the nation and to have the Commander of the Operations Command "Occidental" (Guayas, Santa Elena, Manabí and Galapagos) who readjust their device (driving) in support of the National Police with special attention in the cantons: Guayaquil, Daule, Durán and Samborondón. This would have avoided deconcentrating the military and police command (Chiefs of Staff of the Navy

and National Police) in conducting their national planning.

Two questions can then be asked as a reflection:



Source: White Book-Ecuador 2018

Was the creation of the SPECIAL SAFETY AREA necessary? I presume no, for legal reasons of jurisdiction and jurisdiction since this concept does not exist in the law.

Was it necessary to create the JOINT TAREA FORCE "GUAYAS"? I presume NO, because the conduct of police-type operations in support of the National Police, allows the device to be readjusted according to the operational

circumstances of the moment. (Strengthen, add, change the "center of gravity", centralized reserve, articulated reserve, decentralized reserve, etc., etc... are decisions that operational commanders can execute without the need to create a new unit.)

The legal effects

The Military Plan for Internal Defense of the Armed Forces has been updated with the Constitution of the Republic of 2008 and with the Public security and State Law of 2009. Under the new name of THE EMPLOYMENT PLAN OF THE ARMADAS FORCES IN THE INTERNAL AREA, its legal precepts should be articulated and above all should have due agreement with the Organic Law of National Defense or its equivalent. For this articulation to be consistent with the action of the military and police institution, it is necessary that the Organic Security Code with its four bills be approved in the National Assembly: public security, strategic intelligence, security prevention of risks. It is not fair that the political calculations of the assembly members have marginalized the approval of this legal body

that allows to update the laws with the new global trends in Security and Defense.

This lack of legal support for our institutions is allowing the abusive overflow of crime over the law. Unfortunately, the blatant mockery of some citizens for breaching the state of emergency and curfew has been public and notorious. The Public Force in adherence to the constitutional mandate fulfills the tasks entrusted and in the face of this citizen disobedience has used archaic resources of use of force that are not justified but which make us see the impotence and institutional incapacity in the absence of good laws.

We have been informed that the State Attorney General's Office, by communiqué dated 25 March, calls on institutions and citizens to act in compliance with human rights. An investigation will therefore be initiated for crimes against the integrity of the persons and members of the Public Force identified in the videos circulating social networks, will be subjected to the judgement of the competent judges even though the uniformed were ordered to enforce the law by force.

Article 33 of the Public and State Security Act prescribes: "From liability.- During states of emergency, the abuse of power, by any agent or official of the State, duly verified shall be administratively, civilly and criminally sanctioned, and considering international instruments for the protection of human rights. Civilian, military and police authorities will be responsible for their orders. Obedience to higher orders shall not exempt from liability those who execute them, as provided for in the last subparagraph of article 166 of the Constitution of the Republic."

The troops don't know what to do, they don't trust their commanders when they fall out of favor. Let us remember that there are more than twenty military personnel prosecuted by the prosecution for the presumption of misuse of the progressive use of force, and the lack of effective sponsorship by the military institution has prevented a strong defence in favour of our companions who must come with their own resources to defend what they consider to have done their duty.

Personally, I believe that there is a political motivation within this misfortune to cause chaos

and disorder. It is a great opportunity to discredit the government and the good action of the public force that in favor of the vast majority of citizens is ensuring its safety and survival.

The first representative in use of his constitutional powers in addition to the state of emergency could well urge the National Assembly to prioritize the adoption of the long-awaited Organic Security Code and its bills.

It would be an excellent opportunity for the President of the Republic to strengthen and strengthen his support for the military and police forces to which he strives to congratulate and applaud in times of crisis. Let us hope that this will change, otherwise we will already know who the real culprits of our tragedy are.

(O)



Miguel Oswaldo Moreno Valverde is an Ecuadorian general in passive service, lawyer and expert in matters of Hemispheric Security and Defense. He was a Military Advisor at the Inter-American Defense College in Washington, D.C., and his professional profile encompasses broad areas of academic thinking: He is an International Master in MBA Business Administration, specializing in marketing, Commercial Engineer, Bachelor of Administration and Military Sciences and Doctor of Education Sciences. He also studied three diplomas: Diploma in Teaching Techniques (CEP-Brazil), Higher Diploma in Politics, Security and Democracy (FLACSO-Ecuador) and Diploma in Financial Management. (ADEN International Business School)



EMERG4NCIA SANIT3RIA: A regra legal, a Zona de Seguran7a e os efeitos legais no 3mbito dom3stico.

4 importante compreender o arcabou7o legal para a atua73o das For7as Armadas equatorianas em opera73es militares de seguran7a interna em apoio 3 Pol3cia Nacional e os efeitos legais de sua conduta operacional.



Por Oswaldo Moreno

O autor 4 advogado e especialista em quest3es hemisf3ricas de seguran7a e defesa

Atualizado:

26 de mar7o de 2020. 3s 12h15.

[Leer en espa3ol](#)

[Read in English](#)

[Lira em Fran7ois](#)



QUITO – Como General da República e advogado em livre prática profissional é minha responsabilidade moral, aconselhando as autoridades competentes sobre os efeitos legais do bom ou ruim planejamento, organização, emprego e controle da condução das operações militares no âmbito interno nesta crise global–emergente.



“É minha responsabilidade moral aconselhar as autoridades competentes sobre os efeitos legais do bom ou mau planejamento...”

Eles então perguntarão: E para que são os advogados militares, minha resposta é simples... os advogados sabem sobre leis, mas desconhecem o verdadeiro uso da estratégia militar como ciência e arte que é inferida a partir de certo conhecimento da ciência militar

quando uma crise está relacionada ao equilíbrio do poder nacional.

O Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças (ECDC) informa que de 31 de dezembro de 2019 a 25 de março de 2020, 416.916 casos de O COVID-19, dos quais 18.565 mortes e 302.288 casos positivos foram lamentados nos últimos 15 dias. Em nosso país - segundo o CDC - informamos que temos 1.082 casos confirmados, 27 óbitos e 1.067 casos positivos apresentados nos últimos 15 dias.

A regra legal

As autoridades equatorianas, por meio do Ministério da Saúde Pública, declararam estado de emergência em saúde devido à possibilidade iminente do efeito causado pelo Coronavírus COVID-19, e previne possíveis contágios em massa na população (Acordo

Ministerial Nro. 00126-2020 na quinta-feira, 12 de março de 2020). Em violação a esta declaração, o Ministério do Trabalho emite as diretrizes para a aplicação do teletrabalho emergente e também emite as diretrizes para a implementação emergente, modificação ou

suspensão da jornada de trabalho durante a declaração de Emergência.

O Presidente da República por Decreto Executivo nº 1017, de 16 de março de 2020, decreta estado de emergência para calamidade pública em todo o território nacional, para os casos confirmados de Coronavírus e a declaração de pandemia do COVID-19 pela Organização Mundial da Saúde, que representam um alto risco de contágio para todos os cidadãos. Da mesma forma, o primeiro representante, escopo da declaração de exceção acima mencionada, edita o Decreto nº 1019, de 22 de março de 2020, estabelecendo como **área especial** de segurança toda a província de Guayas com especial atenção aos cantões de Guayaquil, Daule, Durán e Samborondón, a fim de mitigar os riscos, a precaução à saúde, proteger a população, evitar o contágio do vírus COVID19.

Constituição da República no artigo 165 prevê que o Presidente da República, uma vez declarado estado de emergência, pode fornecer, entre outros, o emprego das Forças Armadas e da Polícia Nacional; estabelecer como **área de segurança para toda ou parte do território nacional**; chamar serviço ativo para toda a

reserva ou parte dela, bem como o pessoal de outras instituições; e, pode providenciar a mobilização e requisições necessárias.

A Lei de Segurança Pública e Estadual, no artigo 38, aponta o conceito de **ÁREA DE SEGURANÇA** como a área territorial equatoriana cuja importância estratégica, características e elementos que a compõem, requer uma regulamentação **ESPECIAL** para garantir a proteção desta área contra eventualidades ou ameaças à segurança sujeitas a esta lei.

O artigo 35 (ibid.) da mesma lei diz: "A partir da complementaridade das ações das Forças Armadas e da Polícia Nacional.- Declarou estado de emergência e desde que o Presidente da República tenha providenciado o emprego das Forças Armadas e da Polícia Civil. Nacionais, coordenarão ações das Forças Armadas para apoiar a Polícia Nacional, responsável pela manutenção da ordem pública, até que seja restaurada. O Ministro do Governo, Da Polícia e dos Cultos será responsável por coordenar as ações entre a Polícia Nacional e as Forças Armadas."

É importante enfatizar que o fundo jurídico descrito acima nos permitirá estabelecer claramente a jurisdição como o poder dos juízes para administrar a justiça e a CONCORRÊNCIA como um poder específico que a lei concede a uma pessoa para que ele possa para cumprir o mandato legal dentro de suas funções.

O Código Orgânico Geral de Processos define claramente esses dois conceitos jurídicos:

JURISDIÇÃO e CONCORRÊNCIA. Observa que os juízes têm jurisdição, que pode ser definido como o poder de julgar e fazer cumprir o tribunal e determina que a medida dessa jurisdição é jurisdição; ou seja, o quadro no qual cada juiz atua -e indica o COGP- que, para que um processo judicial seja válido, deve ser realizado e decidido por um juiz competente, sendo que a jurisdição se baseia, primeiro, de acordo com o território e, posteriormente, pela questão (civil, criminal, militar, administrativa, tributária, entre outras).

A Zona de Segurança

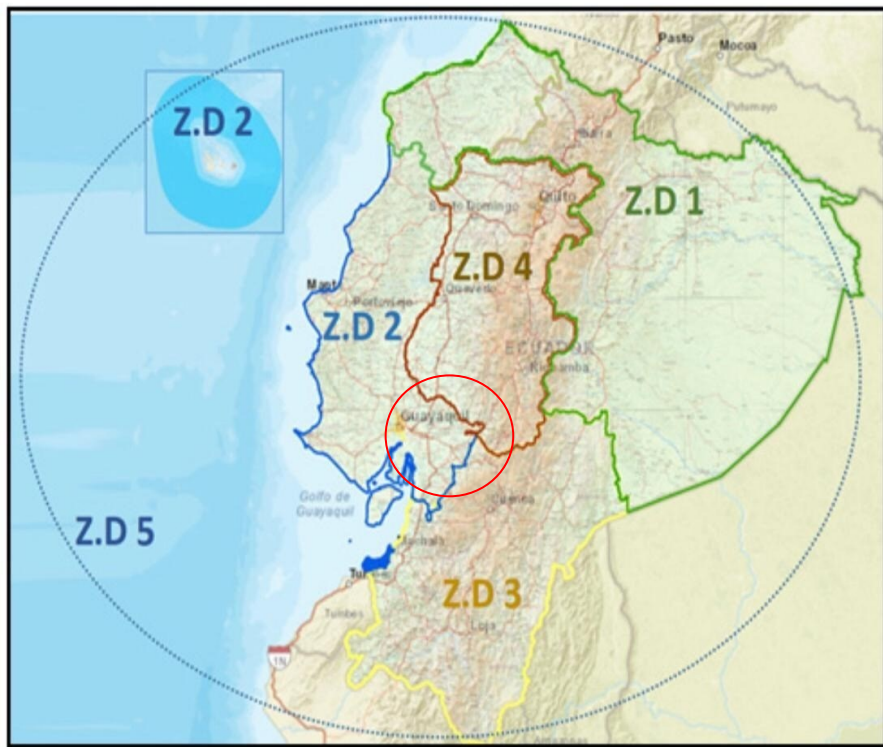
Uma vez declarada como área especial de segurança para a Província de Guayas, a jurisdição de seus juízes naturais e a

competência das ações de seus comandantes devem ser estabelecidas. Como área especial de segurança, é um conceito desconhecido no campo da Segurança Interna, não há jurisdição ou competência legal para justificar a atuação dos militares neste setor da pátria. Portanto, se o Decreto Executivo nº. 1019, datado de 22 de março de 2020 tem como objetivo mitigar os riscos, prevenir a saúde, proteger a população e prevenir o contágio do vírus COVID-19, deve ser o Comitê de Operações de Emergência em nível provincial e liderado pelo Governador de Guayas que coordena todas as ações para as Forças Armadas apoiarem a Polícia Nacional na manutenção da ordem pública, até que ela seja restaurada.

Deve-se notar que teria sido apropriado declarar como área de segurança todo o território nacional porque a pandemia está afogando todos os setores geográficos da nação e ter o Comandante do Comando de Operações "Ocidental" (Guayas, Santa Elena, Manabí e Galápagos) que reajustaram seu dispositivo (condução) em apoio à Polícia Nacional com atenção especial nos cantões: Guayaquil, Daule, Durán e Samborondón. Isso teria evitado desconcentrar o comando militar e

policial (Chefes de Estado-Maior da Marinha e da Polícia Nacional) na condução de seu planejamento nacional.

Duas perguntas podem então ser feitas como uma reflexão:



Fonte: Livro Branco-Ecuador 2018

A criação da **ÁREA ESPECIAL DE SEGURANÇA** foi necessária?

Presumo que não, por razões legais de jurisdição e jurisdição, uma vez que este conceito não existe na lei.

Foi necessário criar a JOINT TAREA FORCE "GUAYAS"?

Presumo que não, porque a realização de operações policiais em apoio à Polícia Nacional, permite que o dispositivo seja reajustado de acordo com as circunstâncias operacionais do momento. (Fortalecer, acrescentar, alterar o "centro de gravidade", reserva centralizada, reserva articulada, reserva descentralizada, etc., etc... são decisões que os comandantes operacionais podem executar sem a necessidade de criar uma nova unidade.)

Os efeitos legais

O Plano Militar de Defesa Interna das Forças Armadas foi atualizado com a Constituição da República de 2008 e com a Lei de Segurança Pública e Estadual de 2009. o novo nome do PLANO DE EMPREGO DAS FORÇAS ARMADAS NA ÁREA INTERNA, seus preceitos legais devem ser articulados e, acima de tudo, devem ter o devido acordo com a Lei Orgânica da Defesa Nacional ou seu equivalente. Para que essa articulação seja coerente com a ação da instituição militar e policial, é necessário que o

Código de Segurança Orgânica com seus quatro projetos de lei seja aprovado na Assembleia Nacional: segurança pública, inteligência estratégica, segurança prevenção de riscos. Não é justo que os cálculos políticos dos membros da assembleia tenham marginalizado a aprovação deste órgão jurídico que permite atualizar as leis com as novas tendências globais em Segurança e Defesa.

Essa falta de apoio jurídico para nossas instituições está permitindo o transbordamento abusivo de crimes sobre a lei. Infelizmente, a zombaria descarada de alguns cidadãos por violar o estado de emergência e o toque de recolher tem sido pública e notória. A Força Pública em adesão ao mandato constitucional cumpre as tarefas confiadas e, diante dessa desobediência cidadã, tem utilizado recursos arcaicos de uso da força que não são justificados, mas que nos fazem ver a impotência e a incapacidade institucional na ausência de boas leis.

Fomos informados de que a Procuradoria Geral do Estado, por meio de comunicado datado de 25 de março, convoca instituições e cidadãos a agir em conformidade com os direitos humanos. Uma investigação será, portanto,

iniciada para crimes contra a integridade das pessoas e membros da Força Pública identificados nos vídeos que circulam nas redes sociais, será submetido ao julgamento dos juízes competentes, ainda que os uniformizados foram ordenados a fazer cumprir a lei à força.

O artigo 33 da Lei de Segurança Pública e Estadual prevê: "Da responsabilidade.- Durante os estados de emergência, o abuso de poder, por qualquer agente ou funcionário do Estado, devidamente verificado será sancionado administrativa, civil e criminalmente, e considerando instrumentos internacionais de proteção dos direitos humanos. As autoridades civis, militares e policiais serão responsáveis por suas ordens. A obediência às ordens superiores não isenta de responsabilidade aqueles que as executam, conforme previsto no último parágrafo do artigo 166 da Constituição da República."

As tropas não sabem o que fazer, não confiam em seus comandantes quando caem em desfavor. Lembremos que há mais de vinte militares processados pela promotoria pela presunção de uso indevido da força, e a falta de patrocínio efetivo da instituição militar impediu uma forte defesa em favor da nossa

companheiros que devem vir com seus próprios recursos para defender o que eles consideram ter cumprido seu dever.

Pessoalmente, acredito que há uma motivação política dentro deste infortúnio para causar caos e desordem. É uma grande oportunidade para desacreditar o governo e a boa ação da força pública que, em favor da grande maioria dos cidadãos, está garantindo sua segurança e sobrevivência.

O primeiro representante em uso de seus poderes constitucionais, além do estado de emergência, poderia muito bem pedir à Assembleia Nacional que priorize a adoção aprovado tão esperado Código de Segurança Orgânica e seus projetos de lei.

Seria uma excelente oportunidade para o Presidente da República fortalecer e fortalecer seu apoio às forças militares e policiais às quais se esforça para parabenizar e aplaudir em tempos de crise.

Esperemos que isso mude, caso contrário já saberemos quem são os verdadeiros culpados de nossa tragédia. (O)



Miguel Oswaldo Moreno Valverde é general equatoriano em serviço passivo, advogado e especialista em assuntos de Segurança e Defesa Hemisférica. Foi Conselheiro Militar no Colégio Interamericano de Defesa em Washington, D.C., e seu perfil profissional abrange amplas áreas do pensamento acadêmico: É Mestre Internacional em MBA Administração de Empresas, especializado em marketing, Engenheiro Comercial, Bacharel em Administração e Ciências Militares e Doutor em Ciências da Educação. Estudou também três diplomas:

Diploma em Técnicas de Ensino (CEP-Brasil), Diploma Superior em Política, Segurança e Democracia (FLACSO-Ecuador) e Diploma em Gestão Financeira (ADEN International Business School).



SANTÉ EMERGENCY: La règle juridique, la zone de sécurité et les effets juridiques au niveau national.

Il est important de comprendre le cadre juridique de l'action des forces armées équatoriennes dans les opérations militaires de sécurité intérieure à l'appui de la police nationale et les effets juridiques de leur conduite opérationnelle.



Par Oswaldo Moreno



L'auteur est avocat et expert en questions de sécurité et de défense hémisphériques

Actualisé:

Le 26 mars 2020. À 12 h 15

[Leer en español](#)

[Read in English](#)

[Ler em português](#)



WIX



QUITO – En tant que général de la République et avocat en pratique professionnelle libre est ma responsabilité morale, conseiller les autorités compétentes sur les effets juridiques d'une bonne ou d'une mauvaise planification, d'organisation, d'emploi et de contrôle de la conduite des opérations militaires **DANS LE CADRE INTERNE** dans cette crise mondiale—émergente.



« Il est de ma responsabilité morale de conseiller les autorités compétentes sur les effets juridiques d'une bonne ou d'une mauvaise planification... »

Ils demanderont alors: Et à quoi en sont les avocats militaires, ma réponse est simple... les avocats connaissent les lois, mais ne sont pas conscients de l'utilisation réelle de la stratégie militaire comme science et art qui est déduit de

certaines connaissances de la science militaire quand une crise est liée à l'équilibre du pouvoir national.

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) signale qu'entre le 31 décembre 2019 et le 25 mars 2020, 416 916 cas de COVID-19, dont 18 565 décès et 302 288 cas positifs ont été endeuillés au cours des 15 derniers jours. Dans notre pays - selon l'ECDC - nous rapportons que nous avons 1 082 cas confirmés, 27 décès et 1 067 cas positifs présentés au cours des 15 derniers jours.

Là norme juridique

Les autorités équatoriennes par l'intermédiaire du Ministère de la santé publique ont déclaré l'état d'urgence sanitaire en raison de la possibilité imminente de l'effet causé par le coronavirus COVID-19, et empêche une possible contagion de masse dans la population (Accord ministériel Nro. 00126-2020 le jeudi 12 mars 2020). En violation de cette déclaration, le ministère du Travail publie les lignes directrices pour l'application du télétravail émergent et publie également les lignes directrices pour la mise en œuvre, la

modification ou la suspension de la journée de travail lors de la déclaration de Urgence.

Le Président de la République, par décret exécutif no 1017 du 16 mars 2020, décrète l'état d'urgence pour **PUBLIC CALAMITY DANS TOUS LES TERRITOIRES NATIONaux**, pour les cas confirmés de Coronavirus et la déclaration de pandémie de COVID-19 par l'Organisation mondiale de la Santé, qui représentent un risque élevé de contagion pour tous les citoyens. De la même manière, le premier représentant, visé par la déclaration d'exception mentionnée ci-dessus, émet le décret no 1019 du 22 mars 2020 établissant comme **ZONE DE SÉCURITÉ SPÉCIALE** à l'ensemble de la province de Guayas avec une attention particulière aux cantons de Guayaquil, Daule, Durán on et Samborondón, afin d'atténuer les risques, la précaution de la santé, protéger la population, éviter la contagion du virus COVID-19.

La Constitution de la République à l'article 165 prévoit que le Président de la République, une fois qu'il a déclaré l'état d'urgence, peut prévoir, entre autres, l'emploi des forces armées et de la police nationale; établir comme **zone DE SÉCURITÉ À TOUS OU PARTIE DE**

LA TERRITOIRE NATIONAL; appeler le service actif à l'ensemble de la réservation ou une partie de celui-ci, ainsi que le personnel d'autres institutions; et, peut organiser la mobilisation nécessaire et les demandes.

La loi sur la sécurité publique et d'État à l'article 38, pointe du côté du concept de **SECURITY AREA** comme zone territoriale équatorienne dont l'importance stratégique, les caractéristiques et les éléments qui la composent, nécessite un règlement SPÉCIAL afin de garantir la protection de ce domaine contre les éventualités ou les menaces à la sécurité soumises à cette loi.

L'article 35 (ibid.) de la même loi stipule: "De la complémentarité des actions des forces armées et de la police nationale.- Déclaré l'état d'urgence et à condition que le Président de la République ait pris des dispositions pour l'emploi des forces armées et de la police National, ils coordonnent les actions des forces armées pour soutenir la police nationale, chargée du maintien de l'ordre public, jusqu'à ce qu'il soit rétabli. Le ministre du Gouvernement, de la Police et des Cultes sera chargé de coordonner les actions entre la police nationale et les forces armées.

Il est important de souligner que les antécédents juridiques décrits ci-dessus nous permettront d'établir clairement la compétence des juges pour administrer la justice et la COMPETITION comme un pouvoir spécifique que la loi accorde à une personne afin qu'elle puisse d'exécuter le mandat légal dans le cadre de leurs fonctions.

Le Code général des processus organiques définit clairement ces deux concepts juridiques: JURISDICTION et COMPETITION. Il note que les juges ont compétence, qu'il peut être défini comme le pouvoir de juger et d'appliquer le tribunal et détermine que la mesure de cette compétence est compétence; c'est-à-dire le cadre dans lequel chaque juge agit et indique au COGP que, pour qu'un processus judiciaire soit valide, il doit être exécuté et décidé par un juge compétent, étant donné que la compétence est fondée, d'abord, selon le territoire et, par la suite par la question (civils, criminels, militaires, administratifs, fiscaux, entre autres).

Là zone de sécurité

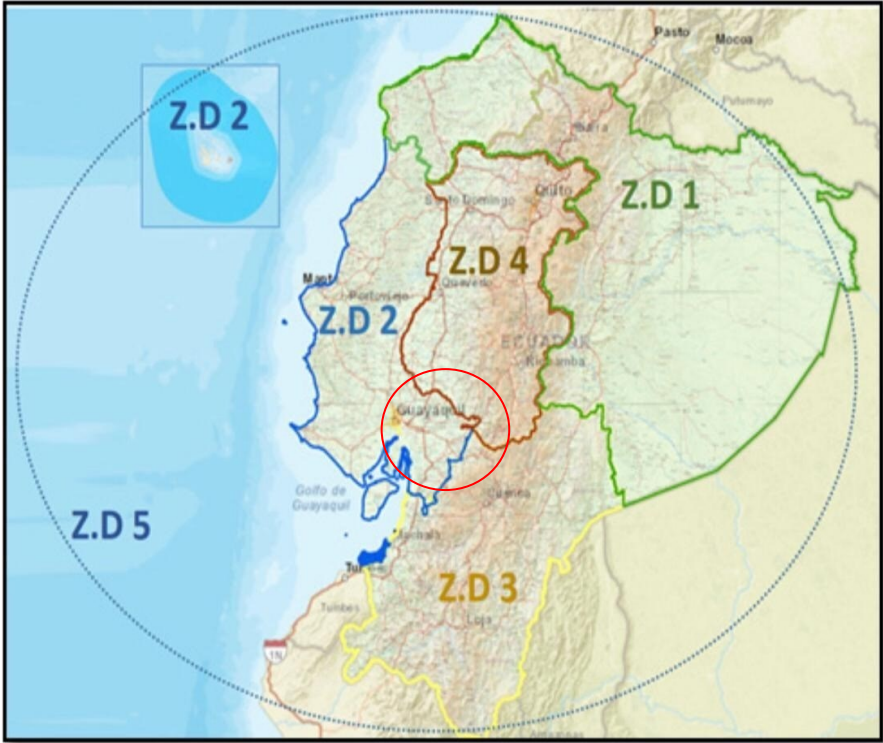
Une fois déclarée ZONE SPECIAL SECURITY à la province de Guayas, la

compétence de ses juges naturels et la compétence des actions de leurs commandants doivent être établies. En tant que SPECIAL SECURITY AREA, il s'agit d'un concept inconnu dans le domaine de la sécurité intérieure, il n'y a pas de compétence ou de compétence juridique pour justifier l'action des militaires dans ce secteur de la patrie. Par conséquent, si le décret exécutif No. 1019 du 22 mars 2020 vise à atténuer les risques, à prendre des précautions pour la santé, à protéger la population et à prévenir la contagion du virus COVID-19, il devrait s'agir du Comité des opérations d'urgence au niveau provincial et dirigé par le gouverneur de Guayas qui coordonne toutes les actions des forces armées pour soutenir la police nationale dans le maintien de l'ordre public, jusqu'à ce qu'il ait été rétabli.

Il convient de noter qu'il aurait été approprié de déclarer comme zone DE SÉCURITÉ tout le territoire national parce que la pandémie est la noyade de tous les secteurs géographiques de la nation et d'avoir le commandant du Commandement des opérations "Occidental" (Guayas, Santa Elena, Manabí et Les Galapagos) qui réajustent leur dispositif

(conduite) à l'appui de la police nationale avec une attention particulière dans les cantons: Guayaquil, Daule, Durán et Samborondón. Cela aurait évité de déconcentrant le commandement militaire et policier (chefs d'état-major de la Marine et de la Police nationale) dans la conduite de leur planification nationale.

Deux questions peuvent alors être posées en réflexion :



Source: Livre Blanc-Équateur 2018

La création de la ZONE SPECIAL SAFETY était-elle nécessaire ?

Je présume que non, pour des raisons juridiques de compétence et de compétence puisque ce concept n'existe pas dans la loi.

Était-il nécessaire de créer le JOINT TAREA FORCE "GUAYAS"?

Je présume que NON, parce que la conduite d'opérations de type policier à l'appui de la police nationale, permet à l'appareil d'être réajusté en fonction des circonstances opérationnelles du moment. (Renforcer, ajouter, changer le «centre de gravité», réserve centralisée, réserve articulée, réserve décentralisée, etc., etc ... sont des décisions que les commandants opérationnels peuvent exécuter sans avoir besoin de créer une nouvelle unité.)

Les effets juridiques

Le Plan militaire pour la défense intérieure des forces armées a été mis à jour avec la Constitution de la République de 2008 et avec la loi de 2009 sur la sécurité publique et l'État.

Sous le nouveau nom de THE EMPLOYMENT PLAN OF THE ARMADAS FORCES IN THE

INTERNAL AREA, ses préceptes juridiques devraient être articulés et surtout avoir dûment un accord avec la loi organique de la défense nationale ou son équivalent. Pour que cette articulation soit conforme à l'action de l'institution militaire et policière, il est nécessaire que le Code de sécurité organique avec ses quatre projets de loi soit approuvé à l'Assemblée nationale : sécurité publique, renseignement stratégique, sécurité prévention des risques. Il n'est pas juste que les calculs politiques des membres de l'Assemblée aient marginalisé l'approbation de cet organe juridique qui permet de mettre à jour les lois avec les nouvelles tendances mondiales en matière de sécurité et de défense.

Ce manque de soutien juridique pour nos institutions permet le débordement abusif de la criminalité sur la loi. Malheureusement, la moquerie flagrante de certains citoyens pour avoir violé l'état d'urgence et le couvre-feu a été publique et notoire. La Force publique, en respectant le mandat constitutionnel, s'acquitte des tâches confiées et, face à cette désobéissance citoyenne, a utilisé des ressources archaïques de recours à la force qui ne sont pas justifiées mais qui nous font voir

l'impuissance et l'incapacité institutionnelle en l'absence de bonnes lois.

Nous avons été informés que le bureau du procureur général de l'État, par communiqué daté du 25 mars, appelle les institutions et les citoyens à agir dans le respect des droits de l'homme. Une enquête sera donc ouverte pour crimes contre l'intégrité des personnes et des membres de la Force publique identifiés dans les vidéos circulant sur les réseaux sociaux, sera soumis au jugement des juges compétents, même si les juges en uniforme ont reçu l'ordre d'appliquer la loi par la force.

L'article 33 de la Loi sur la sécurité publique et d'État prescrit: "De toute responsabilité.- Pendant les états d'urgence, l'abus de pouvoir, par tout agent ou fonctionnaire de l'Etat, dûment vérifié doit être sanctionné administrativement, civilement et pénalement, et instruments internationaux pour la protection des droits de l'homme. Les autorités civiles, militaires et policières seront responsables de leurs ordres. L'obéissance aux ordres plus élevés ne doit pas exonérer de toute responsabilité ceux qui les exécutent, comme le prévoit le dernier sousparacographe de l'article 166 de la

Constitution de la République."

Les troupes ne savent pas quoi faire, elles ne font pas confiance à leurs commandants quand elles tombent en faveur. Rappelons-

nous qu'il y a plus de vingt militaires poursuivis par l'accusation pour la présomption d'utilisation abusive de la force progressive, et l'absence de parrainage efficace par l'institution militaire a empêché une défense solide en faveur de notre compagnons qui doivent venir avec leurs propres ressources pour défendre ce qu'ils considèrent comme ayant fait leur devoir.

Personnellement, je crois qu'il y a une motivation politique dans ce malheur pour causer le chaos et le désordre. C'est une excellente occasion de discréditer le gouvernement et la bonne action de la force publique qui, en faveur de la grande majorité des citoyens, assure sa sécurité et sa survie.

Le premier représentant à utiliser ses pouvoirs constitutionnels en plus de l'état d'urgence pourrait bien exhorter l'Assemblée nationale à donner la priorité à l'adoption du Code de sécurité organique tant attendu et de ses projets de loi.

Ce serait une excellente occasion pour le Président de la République de renforcer et de renforcer son soutien aux forces militaires et policières auxquelles il s'efforce de féliciter et d'applaudir en temps de crise.

Espérons que cela changera, sinon nous saurons déjà qui sont les véritables coupables de notre tragédie. (O)



Miguel Oswaldo Moreno Valverde est un général équatorien en service passif, avocat et expert en affaires de sécurité et de défense hémisphériques. Il a été conseiller militaire au Collège interaméricain de défense à Washington, D.C., et son profil professionnel englobe de vastes domaines de la pensée académique: Il est un master international en administration des affaires MBA, spécialisé dans le marketing, ingénieur commercial, baccalauréat en administration et en sciences militaires et docteur en sciences de l'éducation. Il a également étudié trois diplômes : Diplôme en techniques d'enseignement (CEP-Brésil), Diplôme supérieur en politique, sécurité et démocratie (FLACSO-Équateur) et diplôme en gestion financière (ADEN International Business School).

